



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD
j10famed@cendoj.ramajudicial.gov.co

Medellín, siete de febrero de dos mil veintitrés

PROCESO	Especial – violencia intrafamiliar (apelación)
Denunciante	JULIETTE URIBE ARANGO
Denunciado	FELIPE MOHAMED ROZO JARAMILLO
RADICADO	05001 31 10 010 2022 00529- 01
SENTENCIA	General Nro. <u>35</u> Especial #08
DECISIÓN	Confirma la providencia proferida por la Comisaría De Familia Tres Manrique .

Procede el Despacho a desatar el recurso de apelación interpuesto por el señor FELIPE MOHAMED ROZO JARAMILLO, en contra de la resolución #1407 del 30 de agosto de 2022, proferida por la Comisaría De Familia Tres Manrique de Medellín, Antioquia, en el trámite de Violencia Intrafamiliar instaurado en su contra por la señora JULIETTE URIBE ARANGO.

ANTECEDENTES.

El 3 de noviembre de 2021, la señora JULIETTE URIBE ARANGO denunció por actos de violencia intrafamiliar al señor FELIPE MOHAMED ROZO JARAMILLO, ante la Comisaría de Familia Tres Manrique de Medellín, argumentando que éste la violenta física, verbal y sexualmente. Que en ocasiones la ha encerrado en su casa y le cortó los servicios públicos de internet y teléfono. Además, la amenaza diciéndole que, si la ve con otro la mata, la persigue en la calle y la calumnia.

En esa fecha, se toman medidas provisionales consistentes en la conminación al agresor, orden de desalojo de la casa de habitación, prohibición de acercarse a lugares públicos donde ella se encuentre; obligación para el agresor de realizar tratamiento terapéutico para el control de impulsos. Se fijó cuota alimentaria provisional a favor de la víctima; la protección por parte de las autoridades de policía y se fijó fecha de audiencia.

Recibida la diligencia de descargos, manifestó el denunciado que los hechos son

ciertos, pero algunos ocurrieron hace más de cinco años, que ha sido un hombre responsable con el mercado, los servicios, la salud, la educación para los hijos. Que su esposa ha cambiado su comportamiento y sale de rumba, que también lo ha agredido. Que en la actualidad conviven bajo el mismo techo, pero duermen en habitaciones diferentes. Señala que ha sido sumiso y callado. Admite que le ha tomado fotografías, le quitó los alimentos, que le apretó el brazo. Que ella no le despachaba la comida ni le arreglaba la ropa.

Señala que ella lo agrede verbal y psicológicamente, que utiliza palabras soeces y en una ocasión le pegó en la cara. Por lo que lanzó cargos en su contra.

Se ordenó escuchar a la denunciante en diligencia de descargos, en la que admitió ser ofensiva y utilizar un lenguaje soez en contra de su cónyuge. Manifiesta que él sigue con su conducta intimidante, que se le aparece desnudo, esconde los utensilios que utiliza para el arreglo de la residencia y la preparación de alimentos, no ayuda con los oficios de la casa, continúa persiguiéndola, la amenaza, la intimida y le esconde algunas de sus pertenencias personales.

Se escuchó al señor WALTER DARÍO URIBE, que poco aportó indicando que es hermano de la denunciante y vive contiguo a su residencia, pero no se ha enterado de los conflictos entre la pareja. Señala a su hermana como una mujer grosera, altanera y agresiva.

La Comisaría de Familia realizó audiencia de fallo y profirió la resolución #1407 del 30 de agosto de 2022, en la que declaró al señor FELIPE MOHAMED ROZO JARAMILLO y a la señora JULIETTE URIBE ARANGO responsables de los hechos de violencia intrafamiliar.

Se impusieron las medidas necesarias a fin de evitar la ocurrencia de nuevos hechos disponiendo:

- La conminación para que, en lo sucesivo los señores FELIPE MOHAMED ROZO JARAMILLO y JULIETTE URIBE ARANGO cesen los malos tratos, agresiones físicas, verbales o psicológicas y desliguen de sus dificultades a sus hijos y parientes cercanos.
- Ratificó la orden de desalojo de la casa de habitación del señor FELIPE MOHAMED ROZO JARAMILLO, así como la prohibición de ingresar a la residencia de la señora JULIETTE URIBE ARANGO o acercarse a cualquier lugar público o privado donde ella se encuentre.
- Dispuso el acompañamiento policial para que el señor FELIPE MOHAMED

ROZO JARAMILLO, retire sus pertenencias de la casa de habitación.

- Ratificó la cuota alimentaria fijada en favor de la señora JULIETTE URIBE ARANGO.
- Ratificó la orden al señor FELIPE MOHAMED ROZO JARAMILLO la realización de terapia psicológica.
- Avaló el acuerdo entre las partes, de iniciar los trámites de divorcio y la sociedad conyugal.
- Ratificó la protección a ambos por parte de las autoridades de policía.
- Advirtió a ambos las sanciones legales en caso de incumplimiento a las medias de protección.

En la oportunidad legal, el señor FELIPE MOHAMED ROZO JARAMILLO, a través de su apoderada judicial presenta escrito en el que manifiesta que interpone el recurso de apelación frente a la providencia.

Basa su inconformidad frente a los numerales tercero, cuarto y sexto de la decisión:

El numeral tercero ratifica el desalojo del señor ROZO JARAMILLO de la casa de habitación, el cuarto las medidas de distanciamiento y el sexto la fijación de cuota alimentaria a su cargo para la cónyuge.

A su juicio, si ambos cónyuges fueron considerados responsables de las conductas constitutivas de violencia intrafamiliar, las consecuencias negativas deberían ser para los dos, pero solo el señor Rozo resultó afectado en sus derechos fundamentales a la vivienda y de carácter patrimonial, pues se gravó cuota alimentaria, lo que le parece injusto, si de repartir cargas se trata.

Que la máxima sanción es la orden de desalojo, la cual resulta desproporcionada en tanto comporta el desarraigo del señor Rozo Jaramillo de su entorno familiar, sin que se establezca un tiempo específico, que se torna injusta y carente de ecuanimidad pues da un tratamiento diferenciado a quien está en la misma situación fáctica.

Sobre la cuota alimentaria señala que para el caso no es aplicable, pues el artículo 24 de la ley 1098 de 2006 es para asuntos donde las víctimas sean menores de edad; que la ley 1257 tampoco es aplicable al caso concreto, menos cuando a la ofendida también se le responsabilizó de los hechos.

Que en este caso no debió la Comisaría aplicar la fórmula que se impone cuando se falla un proceso de divorcio y no consulta la sanción circunstancias propias de un proceso de fijación de cuota alimentaria como capacidad del alimentante y necesidad del alimentario y se atiende a criterio de sobreprotección de quien no ha demostrado estar desprotegido.

Termina solicitando: modifique y revoque total o parcialmente complemente la providencia objeto de censura y en su defecto proceda con un pronunciamiento definitivo que exonere de las sanciones impuestas al señor Rozo Jaramillo las morigere en términos de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad.

Por auto del 20 de octubre de 2022, se concedió el recurso de apelación, y se ordenó remitir las diligencias a los Jueces de Familia de Medellín.

Asignada por reparto a esta agencia judicial la causa de la referencia, por auto del 29 de noviembre de 2022, se admitió el recurso de alzada.

Se procede entonces a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor FELIPE MOHAMED ROZO JARAMILLO, contra la citad resolución, para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR:

Con el fin de prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, en desarrollo del artículo 42 de la Constitución Política, se promulgó la Ley 294 de 1996. Para el efecto, se ordenó ofrecer protección a las víctimas de maltratos verbales, físicos o sicólogos entre miembros de una misma unidad doméstica, se previó la conciliación como mecanismo alternativo de solución del conflicto familiar y se consagraron sanciones para el agresor.

En este sentido diserta el Artículo 4° de la Ley 294 de 1996 (modificado por el Artículo 1° de la ley 575 de 2000) al decir que: *“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir (...) una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente”*.

En ese orden de ideas, si ante funcionario competente un ciudadano solicita la imposición de medidas de protección y la autoridad correspondiente considera que

hay lugar a imponerlas, así lo deberá hacer, teniendo en cuenta las circunstancias y hechos que rodeen aquella denuncia. Para ello, se deberá acudir a alguna(s) de las señaladas en el Artículo 5° de la Ley 294 de 1996 (modificado por el Artículo 2° de la Ley 575 de 2000, modificado por el art. 17 de la ley 1257 de 2008 y el art. 17 de la ley 2126 de 2021).

El recurso de apelación es un medio de impugnación a través del cual se busca que una entidad de orden superior enmiende la resolución del inferior. En términos del artículo 18 de la ley 294 de 1996, quien resulte afectado con la imposición de una medida de protección al interior de un trámite administrativo de violencia intrafamiliar puede presentar recurso de apelación, el cual se sujetará en lo pertinente al trámite previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 (Artículo 13 del Decreto 652 de 2001), y será resuelto por el juez de familia o promiscuo de familia.

Finalmente, el artículo 328 del CGP, circunscribe la competencia del juez en segunda instancia, exclusivamente a los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deban adoptarse de oficio en los casos previstos en la Ley; de modo que, bajo este precepto, versará la resolución del recurso en el asunto de disconformidad expuesto por el impugnante.

A la luz de la normatividad citada, que desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, el legislador tuvo como propósito prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, por muy mínima que sea, a través de medidas educativas, protectoras y sancionatorias, posibilitando a las personas que recurran a medios civilizados para la solución de sus conflictos, como la conciliación, el diálogo y las vías judiciales para así evitar en lo posible la respuesta violenta.

La violencia intrafamiliar suele estar relacionada con diversas causas “*culturales, sociales económicas, religiosas, étnicas, históricas y políticas que vulneran la dignidad humana*”, pero la violencia históricamente ha estado inmersa en relaciones de dominio y poder entre hombres y mujeres, es por tal razón que distintas disciplinas han unido esfuerzos para promover la igualdad entre géneros y poder reducir los actos violentos al interior de las familias”.

Es por ello que, la comunidad mundial consciente de dichos problemas sociales y en especial la discriminación que se dirige contra las mujeres ha desarrollado importantes tratados e instrumentos jurídicos para la protección de cualquier tipo de violencia de género, tal es el caso de la Declaración Sobre La Eliminación De La Discriminación De La Mujer (CEDAW 1981), la Declaración Sobre La

Eliminación De La Violencia En Contra De La Mujer (1993); y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

Siguiendo la misma preocupación e interés, la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la Convención de Belém do Pará (1995), prohibió todo tipo de discriminación contra la mujer y dotó de parámetros jurídicos a todos los estados adscritos a esta organización para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, verbigracia el artículo 1 de Declaración de la ONU sobre la eliminación de la Violencia (1993) define así la violencia contra la mujer *“se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”*.

Sentadas la anteriores precisiones la violencia familiar es un fenómeno social que atenta contra la unidad familiar y comprende *“todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de éstos incluyendo hijos adoptivos, y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.”*

En ese mismo sentido en el marco de los Derechos Humanos se ha enmarcado la violencia intrafamiliar “como aquella acción realizada al interior de la familia por uno de sus miembros, que lesionan y amenazan la vida, la integridad, la autonomía, la libertad individual y la dignidad humana de quienes la integran, es decir, son aquellos actos los que producen daños físicos o psíquicos, la tortura, el trato cruel - intimidatorio o degradante - la agresión, el maltrato, la amenaza, el ultraje, el agravio y cualquier otra forma de agresión, es por tal razón que todos los estados deben proscribir toda conducta que atente, amenace o vulnere la integridad familiar.

Acogiendo los conceptos y el interés internacional el Estado Colombiano mediante la ley 51 de 1981 adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la cual todos los países integrantes condenaran cualquier tipo y forma de segregación dirigida a la mujer. Mediante la Ley 248 de 1995, la Republica de Colombia adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

"Convención de Belém Do Pará".

En consecuencia, el artículo 93 de la Constitución Política indica que *“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”*, dichos tratados conforman lo que se conoce como el Bloque de constitucionalidad, es decir las normas, tratados y convenios internacionales aprobados y ratificados por Colombia se integrarán al mandato superior interno y tendrán la misma relevancia e importancia que el derecho Constitución.

Con la expedición de la Ley 294 de 1996, se materializó el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, puesto que se establecieron las normas para prevenir, remediar y sancionar cualquier tipo de violencia familiar, a través de esta normativa las autoridades fueron provistas de directrices jurídicas para proteger al grupo familiar e imponer ciertas medidas.

Dentro de las medidas de protección a la que puede acudir las víctimas y que fueron modificadas por el art. 17 de la ley 2126 de 2021, vale resaltar las siguientes

a) *Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia.*

b) *Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada;*

c). *Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del núcleo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar;*

d). *Obligación del agresor de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, los costos deberán ser asumidos por el victimario.*

j). *Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;*

k). Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla.

Ahora bien, con la expedición da ley 2126 de 2021 se obliga a las Comisarías de Familia a reconocer el enfoque de género en sus actuaciones y concretamente el art. 4 en su numeral 11 indica:

“11. Enfoque de género: Las Comisarías de Familia reconocerán la existencia de relaciones de poder, subordinación, inequidad, roles diferenciados según parámetros de lo masculino y femenino que puedan llegar a vulnerar derechos de cualquier integrante de la familia. Asimismo, tendrán en cuenta que las experiencias de las mujeres, los hombres, y las personas con orientación sexual o identidad de género diversas son distintas, y que la violencia contra la mujer y contra las personas con orientación sexual o identidad de género diversas es una forma de discriminación en razón del género. Las decisiones que se adopten en casos de violencia por razón de género en el contexto familiar, deben propender por erradicar las limitaciones que históricamente han dejado a las mujeres y a las personas con orientación sexual o identidad de género diversas en desventaja.”

CASO CONCRETO:

De una lectura del fallo impugnado, de cara con el estudio de todas y cada una de las piezas procesales que componen el expediente, y del análisis de los reparos concretos a la sentencia instalados en las diligencias, en apelación, en la oportunidad legal, se tiene que los mismos apuntalan a una decisión que considera desproporcionada e injusta ya que la orden de desalojo y alejamiento, afectan al señor ROZO JIMENEZ los derechos a la vivienda y patrimoniales, al fijar una cuota alimentaria.

Dice que la sanción de desalojo es la más drástica y que no se indicó por cuanto tiempo perduraría.

Considera este despacho que con la sanción de desalojo imputada al señor Rozo Jiménez, lo que se pretende es proteger a la víctima de la violencia y si bien es cierto, ambos fueron señalados responsables de conductas constitutivas de violencia, si se hace una ponderación él ha sido más gravoso en sus conductas, desde hace varios años la viene ejerciendo, admitió que los relatos que su cónyuge hizo son ciertos, es decir: la acosa sexualmente, la persigue, la amenaza, le guarda los objetos de la casa y le impide utilizar el menaje doméstico,

incluso para la preparación de alimentos.

Estas son claras conductas de sometimiento, de dominio y poder y minimiza el rol de la mujer, que ha sido ama de casa y se dedicó a la crianza de los hijos, argumentando que no le prepara la comida ni le arregla la ropa.

Admite el señor Rozo, que aun habiéndose proferido la medida siguió ejerciendo actos de violencia, y solo se vino a remediar la situación cuando su cónyuge hizo efectiva la orden de desalojo.

No comprende este despacho porqué cuando en la audiencia de fallo fue interrogado sobre sus expectativas indicó claramente que quiere “seguir viviendo aparte” y ahora al presentar el recurso se queja de la medida de desalojo, más aún cuando se acordó realizar el proceso de divorcio y la correspondiente liquidación de sociedad conyugal, indicando además que quiere proteger el núcleo familiar, cuando es notorio que está resquebrajado, dañado y no se cumple con las funciones de solidaridad, socorro y ayuda mutua.

Estas medidas de desalojo no contemplan un tiempo específico, es la sanción que se impone para evitar el contacto entre las víctima y victimario y si bien aquí ambos incumplieron el deber de respetarse, la mujer que en este caso ha sido ama de casa y no trabaja, amén que según se manifestó la residencia es una herencia que ella recibió de su madre, mal se haría en desalojarla a ella, que además vive con uno de sus hijos (así sea mayor de edad) y por su condición de debilidad manifiesta tiene especial protección.

En cuanto a la cuota alimentaria, es claro que la fijación se hace de manera provisional, y es una medida que está contemplada en el art. 17 lit. j. de la ley 2126 de 2021 y en el caso la señora JULIETTE URIBE ARANGO, cuando fue juramentada manifestó que es ama de casa, mientras que el señor FELIPE MOHAMET ROZO JIMENEZ, dijo que es técnico y es empleado. Lo que es decir, él tiene capacidad económica para suministrar cuota de alimentos en favor de su cónyuge, a quien ha violentado y ha impuesto su dominio y poder privándola de llevar alimentos a la residencia, de hacer uso de los utensilios de cocina, cortándole algunos servicios públicos como el teléfono y el internet, por el hecho de que no le prepara a él alimentación, ni le arregla su ropa (es decir porque no lo atiende).

En consecuencia, la medida impuesta por la Comisaría de Familia, no es injusta, desproporcionada y la cuota alimentaria está sustentada en los lineamientos legales que permiten señalarla.

Consecuente con lo anterior, de la lectura del plenario advierte este despacho sin lugar a equívocos que, los hechos en que se fundamentó la apelación objeto de este mérito no están llamados a prosperar, como quiera que desde que se instauró la denuncia que dio lugar a la decisión que se apela, el actor confesó haber dado lugar a los hechos de violencia objeto de debate y si bien es cierto, se declaró responsables a ambos cónyuges de las agresiones mutuas, la decisión no fue desproporcionada, ni injusta, pues obedece a la protección especial que se debe dar a la mujer cuando se evidencia que las conductas tienen por propósito menospreciar su condición.

En conclusión, se evidencia una valoración racional de la prueba decretada y practicada, misma que fue recogida con arreglo en lo dispuesto en los artículos 164 y siguientes normas concordantes del Código General del Proceso, sumado a que no resultó caprichoso el resultado de las diligencias y las medidas impuestas son proporcionales a la valoración de las mismas.

En virtud de lo anterior, los cargos en contra de la providencia apelada no están llamados a prosperar y será confirmada la sentencia objeto de apelación.

En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución # 1407 del 30 de agosto de 2022, expedida por la Comisaría De Familia Tres Manrique, de Medellín, Antioquia, en el trámite de violencia intrafamiliar denunciado por la señora JULIETTE URIBE ARANGO contra el señor FELIPE MOHAMED ROZO JARAMILLO

SEGUNDO: ORDENAR la devolución del expediente a su lugar de origen, en firme que sea este fallo y previa su anotación en el Sistema de Gestión Judicial.

NOTIFÍQUESE



RAMÓN FRANCISCO DE ASÍS MENA GIL
JUEZ

Dgs.